

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ACOSO LABORAL – APELACIÓN AUTO
DEMANDANTE	HÉCTOR ALONSO MONROY ESCUDERO
DEMANDADO	CARLOS ALBERTO CALDERÓN AGUILAR, CATALINA MARÍA SIERRA MARÍN y JONATHAN GÓMEZ GIRALDO
LITISCONSORTE	LIGA DE TENIS DE CAMPO DE ANTIOQUIA
RADICADO	05001-31-05-013-2022-00393-01
ORIGEN	JUZGADO TRECE LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
TEMAS Y SUBTEMAS	- EXCEPCIÓN PREVIA - ART. 100 CGP NUM. 1º -DECLARACIÓN DE PARTE – SOLICITUD EXTEMPORÁNEA
DECISIÓN	CONFIRMA

AUTO INTERLOCUTORIO No.076

Medellín, veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N°004 de 2023, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver los recursos de apelación interpuestos por el apoderado judicial de **CARLOS ALBERTO CALDERÓN AGUILAR, CATALINA MARÍA SIERRA MARÍN y JONATHAN GÓMEZ GIRALDO**, contra el Auto que resolvió la excepción previa propuesta por ellos, y la decisión que negó el decreto de la declaración de parte de los accionados, providencia dictada el 22 de noviembre de 2022 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

El señor **HÉCTOR ALONSO MONROY ESCUDERO** promovió proceso especial de acoso laboral en contra de **CARLOS ALBERTO CALDERÓN AGUILAR, CATALINA MARÍA SIERRA MARÍN y JONATHAN GÓMEZ GIRALDO** con el fin de que: 1) Se declare que viene siendo objeto de ACOSO LABORAL por parte del señor **CARLOS ALBERTO CALDERÓN AGUILAR**, actos tolerados por parte de los demás miembros del Órgano de Administración de la Liga de Tenis de Campo de Antioquia. 2) En consecuencia, se condene al citado, y a los demás miembros del Órgano de Administración de la Liga de Tenis de Campo de Antioquia al pago de la multa establecida en el numeral 3º del artículo 10 de la Ley 1010 de 2006. 3) Así mismo solicitó que, en caso de verificarse el despido de este o de los testigos que acudan al presente proceso dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de la demanda, se declare carente de todo efecto tal desvinculación (Archivos 02 y 30 ED).

Mediante Auto N° 1751 del 20 de septiembre de 2022, el Juzgado de primer grado admitió la demanda, disponiendo la vinculación al presente trámite de la **LIGA DE TENIS DE CAMPO DE ANTIOQUIA**, quienes procedieron a contestar la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones (Archivos 34 y 35 ED).

Dentro de sus argumentos de defensa, los demandados y la vinculada formularon la excepción previa de “*FALTA DE COMPETENCIA*”, fundamentada en que, por tratarse de un asunto cuya cuantía no supera el equivalente a 20 SMLMV, por disposición del artículo 12 CPLSS, el competente para conocer del asunto especial tramitado lo es el *Juez Municipal de Pequeñas Causas Laborales* (f. 8 a 9 Archivo 35 ED).

Al correrse traslado del exceptivo propuesto por el extremo pasivo, el demandante insistió en que, al tenor de lo contenido en la Ley 1010 de 2006, la competencia para conocer del asunto es del Juez Laboral de Circuito (Archivo 39 ED).

PROVIDENCIA APELADA (EXCEPCIONES PREVIAS)

En audiencia de que trata el artículo 77 CPLSS, en la etapa pertinente, a través de Auto del 22 de noviembre de 2022, la Juzgadora de conocimiento declaró no probada la excepción previa formulada, tras argumentar que, conforme el artículo 13 de la Ley 1010 de 2006 se advierte que el procedimiento especial aquí adelantado es de primera instancia, toda vez que, contra lo decidido procede recurso de apelación.

En ese sentido indicó que, lo consagrado en el artículo 12 CPLSS en cuanto a la cuantía para que los Juzgados Municipales de Pequeñas Causas Laborales conozcan de determinados asuntos no aplica en este caso, como quiera que la pretensión principal es de orden declarativo, encaminada a que se reconozca que el demandante fue víctima de acoso laboral, situación no susceptible de cuantificación, por lo que, en virtud el artículo 13 ibídem, la controversia debe ser conocida por el Juez Laboral del Circuito (Archivo 62 ED).

RECURSO

El apoderado de los demandados y vinculada recurrió la anterior decisión, reiterando su postura en cuanto a que, pese a entablarse una pretensión como la declaratoria del acoso laboral, ello no se desliga del factor cuantía, ya que está atada a una pretensión consecuencial, en este caso, inferior a 20 SMLMV, razón que lleva a que el proceso sea repartido al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales (Archivo 62 ED).

PROVIDENCIA APELADA (DECRETO DE PRUEBAS)

En la misma diligencia, en la etapa correspondiente al decreto de pruebas, la Juzgadora de primer grado decretó las solicitadas por las partes enfrentadas en el presente litigio, dentro de estos, el interrogatorio de parte a ser rendido por **CARLOS ALBERTO CALDERÓN AGUILAR, CATALINA MARÍA SIERRA MARÍN y JONATHAN GÓMEZ GIRALDO**, y en aplicación de las facultades legales del artículo 53 CPLSS, decretó oficiosamente el interrogatorio al DEMANDANTE.

Frente a ello, el apoderado judicial de la PARTE DEMANDADA solicitó la oportunidad de interrogar a sus representados en virtud de la declaración de parte, petición a la que no accedió la Juez de instancia, primero, por considerarla extemporánea, en tanto dentro del trámite laboral las oportunidades procesales para la solicitud de prueba son preclusivas, caso en el cual la posibilidad de la accionada de solicitar pruebas está limitada a la contestación a la demanda y a la reforma a la demanda, momentos en los que la pasiva no requirió dicha práctica probatoria.

En segundo lugar, expuso que este medio probatorio es inconducente, en atención a la imposibilidad de que la propia parte fabrique su propia prueba (Sentencia SC780-2020), dado que los hechos que de esta declaración se extraen, jamás pueden configurar prueba en beneficio de quien los refiere, reiterando que el fin del interrogatorio de buscar la confesión de la parte, y

quien debe extraerla es precisamente la contraparte, tesis la cual dijo, ha sido aceptada por la Sala Laboral de Tribunal Superior de Medellín.

RECURSO

El apoderado del extremo pasivo formuló apelación en contra de la anterior determinación, para lo cual manifestó que, con el nuevo estatuto procesal, la concepción de la declaración de parte es diferente, considerándose viable por parte de la Jurisprudencia y doctrina procesal, permitirle a la parte exponer ante el fallador su versión de los hechos, sin que su interrogatorio tenga como único fin la confesión, en tanto busca contribuir a una mejor interpretación y valoración de los hechos que el Juez tiene bajo su mirada, citando como refuerzo sus argumentos lo señalado en la Sentencia STC9197-2022. De otro lado, expuso que la solicitud no es extemporánea, toda vez que la declaración de parte fue decretada por la juez de primer grado, teniendo como única intención la de ejercer el derecho de contradicción de la prueba. La Juez de conocimiento concedió entonces la apelación (Archivo 62 ED).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto del 23 de febrero de 2023, se dispuso el traslado para alegatos a las partes, habiendo presentado los mismos tanto la parte DEMANDANTE como DEMANDADA.

El apoderado judicial de la parte demandante, sostuvo en primer lugar que, la interposición del recurso por el apoderado de los demandados, no tenía un fin distinto a dilatar el proceso judicial que tiene un trámite preferencial. En segundo lugar, señaló en cuanto a la negativa al decreto de la prueba de la declaración de parte, que además de que la petición de la prueba fue extemporánea, las razones que se dieron en la audiencia por parte de la Señora Juez Trece Laboral del Circuito de Medellín, eran suficientes para el no decreto de la declaración de parte, explicando que, si bien el inciso final del artículo 191 del Código General del Proceso, establece que “La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”, en ninguna parte del mismo código se reguló el decreto y práctica de esta prueba. Se agrega que los demandados no son terceros y por lo tanto no tienen la facultad de declarar sobre lo que se debate en el proceso.

Por su parte el apoderado judicial de la parte demanda, sostuvo en primera medida que, tal Como se observa, la parte demandante acumula dos pretensiones, una sin cuantía y otra en la cual se pretende la condena en contra de su poderdante al pago a la multa de la que trata el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 1010 de 2006, esto es, una multa que orbita entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Manifestando que, si bien es cierto, en los procesos de acoso laboral la competencia se encuentre en cabeza del Juez Laboral del Circuito, esto se debe, no a la existencia de una regla especial de competencia en razón a la naturaleza del asunto asignadas a dicho juez, sino a que en materia laboral, el artículo 13 del Código Procesal del Trabajo dispone una cláusula residual de competencia que atribuye a los jueces laborales del circuito el conocimiento en primera instancia de todos aquellos asuntos no susceptibles de fijación de cuantía, sin embargo, en el caso bajo estudio se observa que la parte activa junto con la formulación de la pretensión atinente a la declaración de acoso laboral, acumuló una pretensión patrimonial en contra de la parte demandada para que esta sea condenada al pago de una multa entre los (2) y diez (10) SMLMV, lo que implica, en principio, una modificación de la naturaleza de las pretensiones para pasar de ser un asunto sin cuantía a uno con una cuantía de hasta diez (10) SMLMV. Ello trae como consecuencia que la competencia se radicaría en razón de la cuantía, en cabeza del Juez Municipal de Pequeñas causas laborales de Medellín a la luz del artículo 12 del citado código y no del juez de Primera Instancia.

En conclusión, afirmó que con independencia del carácter principal u accesorio de la pretensión que tiene una eventual consecuencia patrimonial en contra del demandado, la misma debe ser considerada para efectos de atribución de competencia. Dicho de otra forma, la regla jurisprudencial propuesta se traduce en que en aquellos eventos en los cuales existe una pretensión principal sin cuantía acumulada con una pretensión accesoria continente de montos

cuantificables, el asunto no puede ser considerado como uno sin cuantía y por tanto es inviable otorgar conocimiento residual del asunto en cabeza del Juez laboral del Circuito. Por el contrario, estos supuestos deben regirse según las reglas de competencia por factor objetivo en razón de la cuantía, de suerte que en aquellos eventos tal y como el presente, donde la pretensión accesoria no excede los veinte (20) SMLMV, la competencia debe concederse al Juez de Pequeñas Causas Laborales de Medellín.

Respecto a la negación de la declaración de la propia parte, se señala al Tribunal que el derecho a la prueba se encuentra regulado como parte del contenido del derecho fundamental a probar, en los contenidos de tal derecho se encuentra el derecho a la contradicción. Al respecto, indica se solicitó a la Juez de instancia que a efectos de garantizar el derecho a la contradicción permitiera interrogar a la propia parte, esto es, a su poderdante, a lo cual no accedió pues su tesis es que el Código General del Proceso no confiere el derecho para que el apoderado interroge a su propia parte, punto en el que se equivoca el Juzgado de conocimiento puesto que ha sido ampliamente reconocido que el artículo 191 del CGP amplió la posibilidad de que se pudiera solicitar el interrogatorio de la propia parte, máxime si se solicita como garantía de contradicción para la práctica lícita de la prueba, pues una prueba que no tiene contradicción en su práctica, máxime si es solicitada por una de las partes, será ingresada al proceso con desconocimiento de normas procesales de orden legal y constitucional (f.1 a 6 Archivo 04 ED).

PROBLEMA (S) A RESOLVER

El problema jurídico se centra en establecer si es procedente declarar probada la falta de competencia alegada por el apoderado judicial de la parte demandada. En caso de no salir adelante la excepción en comento, la Sala estudiará si hay lugar a decretar como prueba la declaración de parte de los accionados **CARLOS ALBERTO CALDERÓN AGUILAR, CATALINA MARÍA SIERRA MARÍN y JONATHAN GÓMEZ GIRALDO.**

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo reglado en los numerales 3º y 4º del artículo 65 del CPTSS, según el cual los autos que decidan sobre excepciones previas, y el que niegue el decreto o práctica de una prueba, son susceptibles del recurso de apelación, esta Sala de Decisión es competente para dirimir el presente asunto, para lo cual, se seguirán los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPTSS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

DE LA FALTA DE COMPETENCIA

De acuerdo con los argumentos de la alzada, la Sala no tiene reparo frente a lo considerado por la Juez de primera instancia para despachar de manera negativa los argumentos del mandatario de los recurrentes, quien invoca la presunta falta de competencia para conocer del proceso de la referencia por el factor cuantía.

Así se considera, pues más allá de la disquisición hecha por el apoderado sobre la existencia de pretensiones que, a la par de la petición principal declarativa del acoso laboral, son cuantificables, pero no superan la barrera de los 20 SMLMV, lo que radica en su sentir la competencia del asunto en los Jueces Municipales de Pequeñas Causas Laborales, basta con remitirse a la **normativa del procedimiento especial sancionatorio del acoso laboral**, específicamente al artículo 13 de la Ley 1010 de 2006 que reza:

“(…) ARTÍCULO 13. Procedimiento sancionatorio. Para la imposición de las sanciones de que trata la presente Ley se seguirá el siguiente procedimiento:

(…)

*Quando la sanción fuere de competencia de los **Jueces del Trabajo** se citará a audiencia, la cual tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud o queja. De la iniciación del procedimiento se notificará personalmente al acusado de acoso laboral y al empleador que lo haya tolerado,*

*dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al finalizar la audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. **Contra la sentencia que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los treinta (30) días siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Procesal del Trabajo.** (...)”* (Subraya y Negrilla de la Sala).

Nótese entonces que, la consagración legal evocada muestra sin mayor dificultad que la decisión asumida dentro del trámite especial **es susceptible de ser recurrida en apelación**, condición que de por sí excluye la competencia de los Juzgados Municipales descritos, por la naturaleza de los asuntos asignados a estos, que son todos de única instancia, en los cuales, itera la Sala, la determinación que resuelva de fondo el derecho controvertido no es susceptibles de recurso (Art. 72 CPLSS)

De ahí que, como acertadamente lo señaló la Juzgadora de instancia, el procedimiento estudiado se asimila a los **asuntos ordinarios de primera instancia** (Art. 74 y siguientes CPLSS), que son competencia exclusiva en primer grado, de los **Juzgados Laborales del Circuito**.

Así las cosas, se colige la falta de prosperidad del medio dilatorio propuesto por la pasiva, imponiéndose confirmar la decisión recurrida en este aspecto.

DE LA DECLARACIÓN DE PARTE

Estando en el curso la etapa del *decreto de pruebas*, el apoderado de la parte demandada solicitó al *a-quo* disponer o autorizar la **declaración de parte** de sus representados, medio probatorio cuyo decreto fue denegado por la Juez de primera instancia, tras considerar la solicitud como extemporánea, ello al no atemperarse a las oportunidades dispuestas en el ordenamiento procesal para elevar las respectivas solicitudes probatorias. Así mismo, consideró la funcionaria la improcedencia de su recaudo, por ser inviable que la parte fabrique su propia prueba.

En contra de los anteriores argumentos el mandatario de los demandados esbozó que a partir del CGP se modificó la concepción de la declaración de parte, dando la posibilidad de que, no solo en sede de interrogatorio de parte con miras a lograr la confesión, la parte fuese escuchada por el fallador, procurando un mejor planteamiento del problema jurídico, postura aceptada por la Jurisprudencia y la doctrina, aunado a que, en su sentir, tal petición no es extemporánea, pues con ella se pretende ejercer la contradicción probatoria.

Pues bien, por el aspecto de la pertinencia, razón le asiste al recurrente cuando pone sobre la mesa que a partir de la última codificación procesal civil, se reevaluó la acepción jurídica respecto del *interrogatorio de parte*, admitiendo la posibilidad de que en el escenario judicial, cualquiera de los sujetos procesales solicite su propia declaración.

Así quedó precisado por ejemplo, en el artículo 165 CGP donde se establece como medio de prueba la *“declaración de parte”*, autorización que fue condensada más adelante en el artículo 198 ibídem, que contempló: *“(...) El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso (...)”*.

Quiere decir lo anterior que, la normativa en cita pone en evidencia que no solamente procede el interrogatorio petitionado por la parte contraria, sino que también da paso a que los contendientes puedan rendir su versión sobre los hechos materia del litigio.

Precisamente, así lo ha abordado la doctrina¹, resaltando esta posibilidad como una novedad en la codificación adjetiva civil, explicando que:

¹ Código General del Proceso-Pruebas-; Autor: Hernán Fabio López Blanco; Edición 2017; Editorial: Dupre Editores Ltda; Pág. 185.

"(...) Acogiendo las indicaciones anteriores, se establece en el Código General del Proceso, que se podrá ordenar por "solicitud de parte" la citación "de las partes", expresión primera que conlleva un drástico cambio de lo que había sido en el pasado una posibilidad atribuida solo a "la otra parte" para pedir la citación de la "parte contraria", porque ahora al estar la parte, cualquiera de ellas, pues en donde la ley no distingue el intérprete no lo puede hacer, autorizada para pedir la citación de las partes, emerge con claridad que en el sistema procesal colombiano incuestionablemente se acogió la posibilidad de solicitar la práctica del interrogatorio de la misma parte, lo que sin duda es de gran utilidad, debido a que, tal como lo señala el ya citado ensayo de Adriana López, según "Capelletti, la parte es el sujeto mejor informado del caso en concreto que en el proceso se debe examinar. De ahí la inderogable necesidad que en todos los ordenamientos civiles existe, de utilizar a la parte como fuente de prueba (...)" (Negrilla de la Sala)

En concordancia con lo expuesto, es menester indicar que, la Jurisprudencia misma se ha esforzado por relieves los efectos probatorios de la declaración de parte distintos a la confesión, como se refiere en Sentencia SC5185-2020:

"(...) la declaración en favor no sirve estrictamente a ese propósito. Bien se sabe, a nadie le es dado crearse su propia prueba; de ahí que no hay confesión en las manifestaciones que no afectan a quien las hace o no benefician a la parte contraria. Por supuesto, cuando ello no acontece o no se infiere de lo relatado, puede tener efectos probatorios diversos a la confesión, como cuando los dichos de la parte, sin ser fuente de confesión, están avalados con otras pruebas, por supuesto, si se analiza en conjunto con esos otros medios de prueba. (...)". (Subrayas fuera de texto).

Así mismo, recientemente en Sentencia STC9197-2022 el Alto Tribunal de Casación Civil precisó respeto de la declaración de parte que:

"(...) Con ello no solo desterró la restricción impuesta por el derecho romano y medieval, sino que le dio carta de naturaleza propia a la declaración de parte y primacía al derecho superlativo que tiene toda persona a ser oída por el funcionario que la va a juzgar, sin necesidad de que el juez o su contraparte la llamen a interrogatorio, sino por su propia iniciativa, lo que concuerda con el artículo 29 de la Constitución Política que consagra el debido proceso dentro del cual se halla ínsito el derecho de defensa y contradicción, así como la garantía que tiene todo justiciable para ser escuchado y que está prevista en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a cuyo tenor «toda persona tiene derecho a ser oída por los jueces o tribunales (...) para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil» y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 10 establece que «toda persona tiene derecho (...) a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial (...).

Sin embargo, a pesar que la Sala considera viable el decreto de la declaración de parte como medio de prueba de acuerdo con lo discurrido hasta aquí, ello no autoriza al interesado en la práctica de esta, a elevar la solicitud de la misma en cualquier etapa del proceso, pues debe recodar lo dispuesto en el artículo 173 CGP, aplicable a los contenciosos de índole laboral por la integración normativa (Art. 145 CPLSS), que consagra: *"(...) Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código. (...)".*

En ese contexto, el artículo 31 CPLSS establece en su numeral 5° que la contestación a la demanda contendrá: *"(...) La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba (...)"*, cuestión que se hace extensiva en los mismos términos a la contestación de la reforma a la demanda (Art. 28 CPLSS), siendo estos los dos (2) momentos con los que cuenta la parte accionada para efectuar las solicitudes de prueba que considere pertinentes a fin de demostrar su teoría del caso.

Frente a este punto, vale anotar lo comentado por el mismo doctrinante antes citado, quien al referirse a los principios que orientan el derecho procesal, ha precisado en punto de la solicitud de las pruebas, aplicable justamente al asunto materia de estudio, que: “(...) *Dentro de la misión de orden y garantía que se asigna al derecho procesal es este aspecto central, pues vulneraría el debido proceso por la dificultad o imposibilidad de ejercitar el derecho de contradicción de las pruebas, el permitir su decreto o aporte en cualquier ocasión, como en veces lo quieren los abogados de conducta perfunctoria que so pretexto de que prima el derecho sustancial sobre el procesal tratan de solicitar o aportar pruebas cuando ya venció la ocasión para hacerlo (...)*”.

De tal manera que, en aplicación del **principio de preclusión**, reitera la Colegiatura, no le era dable a la parte demandante blandir peticiones probatorias como la efectuada en el mismo momento del decreto probatorio, estatuido en la audiencia del artículo 77 CPLSS, en la medida en que esta devendría en improcedente por extemporánea. En consecuencia, se juzga como acertada la negativa de la Juzgadora de primer grado al decreto de la declaración de parte solicitada, por las razones expuestas, por lo que habrá de confirmarse esta determinación.

En síntesis, la Sala confirmará las providencias recurridas por la parte demandada. Las costas en esta instancia estarán a cargo de **CARLOS ALBERTO CALDERÓN AGUILAR, CATALINA MARÍA SIERRA MARÍN y JONATHAN GÓMEZ GIRALDO**, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a medio (1/2) SMLMV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR los Autos emitidos el 22 de noviembre de 2022, proferidos por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, a través de los cuales: **1) declaró no probada la excepción previa de “falta de competencia”** propuesta por los demandados, y así mismo, **2) Negó la declaración de parte solicitada por el extremo demandado.**

SEGUNDO: Las **COSTAS** de esta instancia están a cargo **CARLOS ALBERTO CALDERÓN AGUILAR, CATALINA MARÍA SIERRA MARÍN y JONATHAN GÓMEZ GIRALDO**, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a medio (1/2) SMLMV.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 054 del 29
de marzo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>